



DEFINICIONES Y
APROXIMACIONES
TEÓRICAS RELEVANTES

Un libro reciente de Henry Kissinger sobre las formas que ha asumido en los últimos siglos el orden mundial estudia los canales mediante los que los países adquieren prestigio para ejercer a su vez una mayor influencia en la configuración del orden internacional. Hay órdenes en los cuales un Estado tiene las condiciones para centralizar el poder e imponer su punto de vista. Esto depende de factores objetivos y subjetivos que varían con el tiempo. Hay otros en los que ningún Estado se mantiene en condiciones de imponer su hegemonía a los demás y surgen órdenes basados en determinados equilibrios o balances de poder (Kissinger, 2014).

La visión clásica de la teoría del Estado sugería, desde Maquiavelo hasta la primera mitad del siglo xx, que los Estados podían (y debían) engrandecerse en detrimento de los demás. El prestigio de los Estados (y de los príncipes) estaba en función directa de su capacidad para mantener su posición geoestratégica y evitar que sus competidores (o rivales) les disputaran su primacía. La autoafirmación era un fin en sí mismo. Además, la concepción tradicional del Estado ligado a un territorio empezó a convivir con la idea de ampliar el dominio de la potencia y, de esa manera, abrir los horizontes imperiales a nuevos continentes. Eso agregaba prestigio a las casas reinantes en Europa.

Si eso fue válido en esa etapa de la historia, lo cierto es que, a lo largo de los siglos XIX y XX, tal concepción se modificó gradualmente por nuevas tendencias que ganaban legitimidad. Las independencias iberoamericanas fracturaron al Imperio español y la Primera Guerra Mundial provocó el colapso de varios imperios (el ruso, el otomano, el austrohúngaro), lo cual favoreció que distintas nacionalidades accedieran a tener su propio Estado nacional. Aun-

que el proceso no estuvo exento de complicaciones, los imperios tradicionales entraron en una fase de obsolescencia y los Estados nacionales adquirieron su carta de naturaleza como sujetos primordiales del orden internacional. Ni la Sublime Puerta, ni el Imperio austrohúngaro eran ya, al arrancar el siglo XX, fuentes de prestigio, sino más bien poderes despóticos y desprestigiados. El Imperio británico sobreviviría algunos años más, pero se disolvería sin pompa ni circunstancia.

En sentido contrario, los pueblos que luchaban por su liberación (social y nacional) despertaban mayor estima. Una vez alcanzado el poder en muchos de los países sojuzgados, las elites revolucionarias o liberadoras recibían una vigorosa corriente de simpatía de otras partes del mundo, como ocurrió con el gobierno de la URSS que alcanzó a proyectar un prestigio planetario, como probablemente ningún otro poder lo había hecho en los siglos precedentes, desde la Independencia de Estados Unidos o la Francia revolucionaria. Si tras la Primera Guerra Mundial los imperios quedaron fatalmente golpeados en su prestigio, con la derrota de la belicosa Alemania nazi, después de la Segunda Guerra Mundial, el planteamiento de un avance agresivo sobre la soberanía de otros países sufrió un golpe mortal en términos de reconocimiento.

El esquema de adquirir prestigio a través del poder militar, lejos de ser admirado, fue crecientemente repudiado por la comunidad internacional. El proceso de descolonización y la expansión del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos establecieron una nueva frontera para definir aquello que era aceptable y lo que no lo era en el uso del poder nacional. Una guerra de conquista tradicional, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, no sólo es contraria a la legalidad internacional, sino que puede ser claramente impopular (el gobierno soviético lo comprobó con la invasión a Afganistán en las postrimerías de los ochenta; Saddam Hussein lo vivió en 1991 cuando invadió Kuwait y Estados Unidos lo experimentó en Irak en 2003).

Una guerra de conquista puede tener fundamentos muy sólidos desde la perspectiva del interés nacional, pero suele dejar un balance negativo en términos de reputación para quien la promueva. La aplicación descarnada del poder duro resta puntos en la otra esfera del poder, el llamado blando. Este poder es cada vez más importante en un mundo en el que los países compiten por atraer recursos a su territorio. En este nuevo orden mundial

no hay forma de desentenderse de la imagen y el prestigio que el propio país proyecta al exterior, y al mismo tiempo hay que comprender las reglas que rigen ese mundo de las percepciones.

En efecto, uno de los elementos básicos de la proyección de poder en el siglo XXI es la imagen del país y todo lo que se desprende de ella. Es paradójico constatar que su estudio sistemático no se incorporó como un elemento central del análisis político hasta muy avanzado el siglo XX y es igualmente sintomático que no todos los países la hayan priorizado en sus políticas exteriores; es más, algunos ni siquiera la consideran. Esta falta de sincronía entre los requerimientos del contexto global y la propia actuación de los gobiernos nacionales se debe a una aplazada actualización de sus doctrinas y prioridades de política exterior, producto de una inercia interpretativa de las relaciones internacionales.

La realidad va siempre delante de la teoría y, por eso, buena parte de las tradiciones teóricas de la disciplina o bien pasan por alto el tema o, en el mejor de los casos, lo tocan tangencialmente, como si se tratara de un elemento accesorio. La escuela del realismo, por ejemplo, ha legado un sólido patrimonio analítico a la disciplina de las relaciones internacionales. Su objeto de análisis básico es el poder de los países y su capacidad de influir en el escenario internacional en el que se desenvuelven. La fortaleza económica y el poderío militar son, desde esa óptica, los determinantes fundamentales para definir el equilibrio de fuerzas en un contexto determinado. En consecuencia, el poder efectivo de un país depende en última instancia de esas capacidades sustantivas.

Es claro que Estados Unidos o China poseen un nivel de influencia enorme por sus atributos de poder. China es respetada por su poder duro e incluso muchos gobiernos no se atreven a tocar temas sensibles como el Tíbet o los derechos humanos. Sus capacidades económicas, financieras y militares disuaden a muchos líderes de abordar asuntos que tienen un potencial irritante con el potente interlocutor. El temor a perder algunas ventajas explica la omisión o la comprensión solidaria de la perspectiva gubernamental.

Es indiscutible que el presupuesto del poder, como gran palanca de las relaciones entre países, sigue siendo válido. Es igualmente claro, sin embargo, que las relaciones internacionales del siglo XXI son crecientemente influidas por las percepciones que unos actores tienen de otros y que

muchas decisiones se toman en función de aquéllas (sean positivas o negativas). Esto es particularmente importante en regímenes abiertos y pluralistas, en los que la conducción de la política exterior deja de ser un coto de actuación exclusiva de los gobiernos. En un sistema abierto, un creciente número de actores participa en la deliberación y confección de la política exterior. Éstos se ubican en un rango amplio, pero discontinuo, que va desde los empresarios hasta las organizaciones de la sociedad civil. Cada uno de éstos impulsa agendas muy precisas y en muchos casos contrastantes, que es lo característico de las sociedades abiertas y pluralistas.

La opinión pública tiene, además, un peso creciente en la confección de la política exterior.⁷ Se puede aducir que la conducción de la política exterior sigue siendo una potestad de los gobiernos y que muchas decisiones se adoptan contra el parecer de la mayoría (porque así lo dicta la interpretación que cada líder haga del interés nacional), pero los gobiernos son cada vez más sensibles a las opiniones públicas nacionales y también a las de los grupos de interés (y de presión), que en muchos casos actúan como elementos condicionantes o fijadores de límites para su acción exterior.

En otras palabras, la disposición favorable o adversa de la opinión pública a apoyar un curso de acción y sus percepciones sobre un país determinado (amigo o enemigo) hoy tienen una relevancia insoslayable, tanto en la formulación como en la puesta en operación de la política exterior.

Pero volvamos a las corrientes teóricas. Como bien apuntan Jorge Schiavon y Rafael Velázquez, si el realismo se centra en el análisis del poder, el idealismo y el neoliberalismo institucional abren su ángulo de lectura para incorporar las percepciones de la opinión pública como un elemento configurador de la política exterior. Es el “constructivismo” la corriente teórica que mayor peso concede a las percepciones y su interacción con la confección de la política externa (Schiavon y Velázquez, 2010: 3). A pesar de ser un enfoque relativamente reciente y, por lo tanto, con menos profundidad que las teorías tradicionales (liberalismo, realismo o racionalismo), el constructivismo social se ha convertido en una perspectiva teórica cada vez más influyente. Consideremos sus puntos centrales.

⁷Aunque en este trabajo usamos “opinión pública” en el sentido más convencional del término, vale la pena recordar que alrededor de ese concepto de uso común hay todo un debate histórico y fronteras conceptuales. Véase Price (1994).

El enfoque en cuestión centra su análisis en el papel que cumplen las ideas, las normas, la cultura y las instituciones en el diseño de la política externa. En otras palabras, pondera de manera efectiva la interacción entre intereses e ideas. El punto central es comprender cómo las percepciones, creencias y a veces prejuicios propician que se elijan algunas opciones de política y se descarten otras.

La corriente constructivista considera la identidad y la cultura como elementos cruciales en el desarrollo de la política internacional de los países y, por lo tanto, cada vez tiene mayor peso la opinión pública; de allí la importancia de perfilar una buena imagen del país y labrarse una buena reputación, no sólo entre las elites, sino entre los ciudadanos comunes y corrientes.

Aunque no se trate de un proceso mecánico, es habitual que las posiciones que cada país tiene en el ámbito o escenario internacional sean un reflejo directo de su política interna, que a su vez es producto de su identidad y de la forma en que un pueblo percibe a los demás. Que México haya aplicado una política no intervencionista y que Estados Unidos sea un actor protagónico en la escena internacional (además de un poder diferenciado) son, de acuerdo con el enfoque constructivista, los síntomas de una política exterior empapada de la identidad nacional de cada país, de cómo se concibe cada cual y de cómo cree que debe comportarse en la esfera internacional. Estados Unidos se asume como el país “indispensable”.

México tiene, como hemos argumentado en otros trabajos, una visión reducida de sus propias capacidades (Curzio, 2010). El enfoque constructivista concede un papel central a la sensibilidad de cada sociedad en los distintos temas de la agenda. No es posible establecer una regla general que determine hasta qué punto la opinión pública influye en el ánimo de los gobernantes. Es muy variable, porque los estados de ánimo de la sociedad son inestables y el tratamiento sólo es casuístico.

Ahora bien, ocurre también el proceso en sentido contrario, esto es, que los gobernantes influyan (con discursos, arengas, amenazas, acuerdos con líderes de opinión) en la conformación de posturas de la opinión pública sobre temas específicos. Tampoco se predetermina un patrón general de comportamiento. Puede ocurrir entonces que los estereotipos que han germinado en el imaginario colectivo sobre otro país o un grupo de migrantes desplacen las percepciones matizadas y mejor contextualizadas de las burocracias que se encargan de

conducir las políticas exterior, comercial, migratoria o de seguridad, constrañéndolas a adoptar posturas más radicales.

El tratamiento de la reforma migratoria en Estados Unidos es un buen ejemplo de esta situación. La sensibilidad de las elites suele ser diferente del criterio del gran público (por el grado de información de que disponen), pero para los políticos es cada más vez más costoso tomar decisiones en contra del sentir de sus bases. Algo similar acontece con los cuerpos de asesores de las empresas multinacionales: se refugian en la comodidad del lugar común sobre lo que ocurre en un país para no ir en contra de una poderosa corriente de opinión que los arrastra.

En una democracia liberal, la relación entre la opinión pública y la política exterior es mutuamente condicionante. Hay dos vertientes de interpretación: la primera es la llamada *bottom-up*, que (como el nombre mismo deja entrever) asume que la opinión tiene impacto e influencia mensurable en la confección de la política exterior; la segunda se conoce como *top-down* y preconiza, por el contrario, que la opinión pública se moldea y estructura desde las oficinas del Estado.

La validez de cada una de estas dos vertientes varía en función de muchos factores: entre otros, la organización gubernamental, las instituciones, las redes políticas y el tema de agenda en particular. La perspectiva constructivista permite no sólo analizar los desarrollos más recientes de la política internacional, sino que ayuda también a reinterpretar hechos del pasado que nos ofrecen formidables relecturas sobre lo que aconteció.

Por ejemplo, en su muy documentado estudio sobre las causas que propiciaron la Primera Guerra Mundial, Margaret MacMillan demostró que la opinión pública ya jugaba un papel determinante en ampliar o reducir las opciones de los gobiernos. Éstos también disponían de un amplio arsenal para influir en la opinión pública y orientarla en el sentido que les resultara más conveniente (MacMillan, 2013).

Si dejamos el plano teórico y nos remitimos a dos casos recientes, quizá podamos ilustrar mejor el punto. La guerra de Irak de 2003 ofrece elementos de análisis muy reveladores para estudiar la interacción entre opinión pública y la toma de decisión en política exterior.

En España, las encuestas de opinión arrojaban que la sociedad era contraria a la intervención propuesta por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Con esa opinión adversa y sin el concurso de la legalidad

internacional, el gobierno de José María Aznar decidió que la relación Madrid-Washington se reforzaría si otorgaba el apoyo que muchos países (incluidos México y Canadá) regateaban o directamente negaban (Francia y Alemania) a la aventura bélica de Bush. Aznar acompañó a Bush en su cruzada iraquí hasta que las instituciones democráticas cambiaron la orientación del gobierno hispano.

En las elecciones de 2004, el candidato del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, se hizo eco del clamor de la sociedad española en contra de una guerra declarada con artimañas y graves falacias, y cambió el sentido de la política exterior al ocupar la presidencia del gobierno. Una vez instalado en el Palacio de la Moncloa, Zapatero retiró las tropas españolas del frente iraquí, reconciliando así a la opinión pública con el proceder de su gobierno en el frente externo (Gavilondo, 2005: 431). La imagen de España como actor responsable en el ámbito global sufrió mucho por esos cambios de orientación, pero el peso de la opinión pública quedó acreditado en la toma de decisiones.

El caso de México es igualmente interesante de analizar bajo el prisma de la influencia de la opinión pública en la toma de decisiones. El gobierno de Vicente Fox recibió fuertes presiones externas para alinear su postura con la estadounidense y apoyar la citada invasión. Sabemos que uno de los componentes tradicionales de la política exterior mexicana es eludir el uso de la fuerza y que es muy difícil que un presidente navegue en sentido contrario a este principio doctrinario por el desgaste que implica en términos de opinión pública, aunque sea atractivo modificar la postura tradicional para mejorar la posición nacional en otros frentes. Muchos empresarios e intelectuales (ahora lo sabemos) propusieron al presidente Fox apoyar la guerra en Irak, con el fin de consolidar una relación privilegiada con Washington. En otras palabras, seguir la línea de razonamiento de Aznar. Fox se negó. La decisión de no apoyar la invasión de Irak se fundó en varios componentes que vale la pena retomar.

Además de los elementos doctrinarios y las tomas de posición pública en contra de la manipulación de las supuestas armas de destrucción masiva en poder de Hussein que eran la justificación de la invasión, el peso de la opinión pública fue definitivo para moldear la decisión y vencer las dudas que el jefe del Estado albergaba sobre el camino correcto a seguir. Jorge Castañeda y Rubén Aguilar, el canciller y el portavoz presidencial

respectivamente en ese gobierno, publicaron un libro (revisado por el propio Fox) en el que establecieron

por sus convicciones religiosas, por su sensibilidad a las encuestas (la opinión pública se oponía a cualquier tipo de apoyo a la guerra), y porque no lo persuadían los argumentos de Estados Unidos, Fox había decidido no apoyar a Bush en el Consejo de Seguridad de la ONU (Aguilar y Castañeda, 2007: 245).⁸

Conviene destacar que estos dos casos, el español y el mexicano ilustran que las grandes decisiones de política exterior en una democracia no dependen sólo de burocracias que hicieron cálculos más o menos acertados sobre lo que convenía al interés nacional en los mediano y largo plazos. Las oficinas gubernamentales suelen tener una visión más pormenorizada de los problemas que se derivan de determinadas acciones, pero no siempre están dispuestas (por razones políticas) a tomar distancia de la opinión pública. Para quienes toman las decisiones, sin embargo, es siempre más cómodo hacerlo en consonancia con las interpretaciones ampliamente difundidas en vez de confrontarlas. Una buena parte de la política estadounidense está determinada por tales confrontaciones entre la visión de los gabinetes sobre lo que se debería hacer y la voz tanto de los medios como del pueblo que pueden tener sensibilidades diversas. Así, el fenómeno migratorio y otros asuntos adyacentes están tan encaminados en complacer a las clientelas, que a veces se reduce el espacio para tratar esos temas sensibles con serenidad y amplitud de miras.

Para Estados Unidos, la guerra de Irak supuso también un caso muy fecundo para el análisis de la interacción entre toma de decisión, opinión pública nacional y global (Fukuyama, 2006). La decisión de Bush de prescindir del parecer de sus aliados y de la comunidad internacional implicó que el antinorteamericanismo creciera en el mundo como no había ocurrido en décadas (Pew Research Center, 2003). El gobierno de Bush instrumentó una política internacional agresiva en la que combinaba ideas vagas sobre la imposición de la democracia por la vía de las armas y por la avenida del unilateralismo. Algún crítico llamó a este idealismo musculoso

⁸En ese mismo libro se revela que diversos empresarios (como Valentín Díez Morodo y Roberto Hernández) le plantearon a Fox apoyar la guerra de Irak (Aguilar y Castañeda, 2007: 248).

una especie de wilsonianismo con esteroides, una contradicción en toda la línea. El desgaste fue enorme por su profundidad y velocidad. Estados Unidos comprobaba que la pretendida defensa de un ideal (la derrota del terrorismo y la democratización de Irak) no podía sostenerse sin la legitimidad de las instituciones multilaterales, el parecer de los gobiernos amigos y la opinión pública de los países aliados. El poder militar y la voluntad política de Estados Unidos no bastaban. Bacevich escribió al finalizar la administración de Bush un texto muy notable que recordaba los límites de un poder sin contrapesos y sin la habilidad de anticipar efectos perversos por su despliegue unilateral y arrogante (Bacevich, 2008). Aunque unos años atrás, cuando la guerra de Irak fracasaba, esto no se vislumbraba. Los teóricos que defendían el planteamiento de ubicar a Estados Unidos como un ente resuelto para ordenar el sistema mundial y contener a sus enemigos, como Robert Kagan (2004), esgrimían argumentos agresivos sobre la naturaleza hobbesiana del orden mundial y la desenfrenada lucha por el poder. Pronto encontraron que los límites del poder duro eran bastante más próximos a la realidad de lo que ellos suponían y en este contexto entra con mayor fuerza la paradoja central del poder estadounidense: tener la supremacía en los campos militar y económico no asegura a la potencia que en todo momento podrá conseguir sus objetivos (Nye, 2002).

El teórico del *soft power*, Joseph Nye, entró de lleno en la polémica y escribió un par de libros (2004 y 2009) en los que profundizó y dio todos sus alcances al concepto y a las implicaciones que éste puede tener en el ejercicio del liderazgo político contemporáneo. El concepto “poder blando” había emergido en los años noventa cuando tuvo un auge relativo una de las llamadas olas del decadentismo estadounidense. Estas olas forman parte del debate político estratégico de ese país. Con alguna regularidad se plantea el tema del desgaste del poder estadounidense y el ascenso de otro poder que lo desafía (Joffe, 2014). Hay una colección muy amplia de libros de distintas calidades y profundidad que retoman una parte o la totalidad del problema.⁹ Nye argumentaba que el declive o decadencia de Estados

⁹El más conocido y citado es Kennedy (1988). Una perspectiva comparada muy útil es la de Lundestad (2012).

Unidos sería menos pronunciado que el de otros poderes en el pasado en la medida en que la potencia mantuviese elementos que le permitiesen influir en el ánimo de otros países. Propuso que existe un cambio en la naturaleza del poder que se ejerce en la escena internacional (2004) y que los fundamentos tradicionales (poderes militar y económico) deben combinarse con la capacidad de seducir a otros pueblos para influir en ellos. El poder tradicional tiene que ver con incentivos (la zanahoria) y castigos (el garrote), pero en el escenario del siglo XXI esos recursos quizá sean insuficientes y los países necesiten emplear otros mecanismos, como los de la seducción y la persuasión.

En efecto, el poder blando tiene la capacidad de transformar preferencias y crear escenarios más favorables para la consecución de los objetivos. De manera general el poder blando, según observa su principal teórico, tiene su origen en tres esferas: la primera es la cultura, particularmente si la de ese país es atractiva para los demás. No nos referimos sólo a la gran cultura o al legado histórico (que ayuda mucho), sino a todas las expresiones de lo que antropológicamente se llama cultura, desde la cocina hasta el entretenimiento. Mientras mayor vocación de universalidad tengan las expresiones culturales de un país, más probable será que se conviertan en recursos de poder si se proyectan adecuadamente en el escenario regional o global en el que se pretenda influir. La segunda son los valores políticos que sostienen y promueven las instituciones de ese país: mientras más sencillas, creíbles, originales y atractivas para otros pueblos sean las ideas políticas que impulsa ese país, mayor será su capacidad de influir y a la inversa, mientras más parroquianos y particularistas sean los rasgos de la cultura política, menor será el impacto. La tercera esfera es la política externa, que puede ser una palanca poderosa si tiene credibilidad y autoridad moral. Un país que defiende causas justas y se compromete con la cooperación, la negociación o la participación directa en operaciones de paz auspiciadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) gana legitimidad y credibilidad, lo que se traduce en recursos del poder blando. No todos los países cuentan con esta clase de recursos llamados poder blando; algunos los tienen en la cultura y no en sus instituciones políticas, otros los tienen en su política externa. Las combinaciones son variables y, en principio, Estados Unidos posee suficientes fichas en los tres componentes del *soft power*.

México es fuerte en cultura y relativamente fuerte en proyección externa; no obstante, sus instituciones son un pasivo en términos de reputación.

Como ya se comentó, en una democracia deliberativa el peso de la opinión pública es enorme y los responsables de la toma de decisiones no pueden (salvo en casos extremos, como tal vez ocurrió cuando Bill Clinton aprobó en 1994-1995 el préstamo para rescatar financieramente a México) evadir su juicio o ir directamente en contra de su sentir. Si determinada población tiene una muy mala imagen de un país, la aprobación de paquetes de apoyo o cualquier tipo de cooperación será mucho más complicada de procesar.

La imagen que se presenta de un país en otro puede compararse con el historial de crédito de una persona. Se paga una mayor tasa de interés cuando el prestigio está dañado. Por tanto, el estudio de las percepciones es fundamental. Entender cómo ven a un país los demás es un ejercicio fundamental y tratar de mejorar la imagen que se proyecta debería ser una prioridad de la política exterior. Todos los países tienen una imagen de sí mismos, que no siempre es la que tienen los demás. Es fácil atribuir a la ignorancia colectiva ese desfase (no conocen mi país porque son obtusos), pero es muy difícil reconocer que si bien un canadiense ignora dónde se ubica Yucatán, también es probable que pocos mexicanos puedan mencionar el nombre de cuatro estados de la federación brasileña o de la canadiense. Más que un asunto normativo se trata de un problema práctico que el país interesado debe plantearse. ¿Cómo conseguir que en un país determinado se conozca mejor mi propia realidad?, ¿cómo lograr que cuando se menciona al país se tenga el mayor número de registros para contextualizar o matizar una noticia?, ¿cómo asegurar que los seguidores de Trump tengan una visión más pormenorizada de lo que significa el TLCAN y la aportación mexicana?

En términos generales se podría argumentar que, si la relación entre los países es distante y con pocos conflictos, la imagen que tenga uno del otro resulta irrelevante. En México, por ejemplo, la opinión pública no tiene en alta consideración a países como Israel o Irán (CIDE, 2013: 62-63). Este hecho puede deberse a que ambos tienen una cobertura mediática poco favorable; sin embargo, la interacción es tan escasa que el tema se considera superfluo.

Otro caso puede ser el de países con pocas interacciones políticas, económicas y sociales y que la distancia no impida que se cultive una buena imagen mutua, sin entrar a demasiados detalles. El asunto, como en el caso anterior, tampoco presenta complicaciones. Abre, por el contrario, ventanas de oportunidad para atraer inversiones, turismo o cualquier iniciativa conjunta que se quiera explorar. Al no haber un juicio negativo sobre holandeses o suecos, por citar dos casos, la buena imagen (o la mutua simpatía) resulta un propulsor para profundizar las relaciones, mas no deja de ser un elemento marginal en la gran estrategia nacional. El problema surge cuando la ecuación tiene tres componentes:

- 1) Muchas interacciones (algunas de las cuales son fuentes de conflicto casi permanente).
- 2) Asimetría en todos los campos del poder (económico, político, militar, científico e incluso en el llamado poder blando).
- 3) Una mala reputación del país más débil entre la población del más poderoso, combinada con una visión aspiracional (pero en última instancia buena imagen), del más poderoso en la población del país menos fuerte.

La construcción de imágenes influye contundentemente en la formulación de políticas y en la creación de ambientes para desplegar nuevos proyectos. Y la relación México-Estados Unidos, que abordaremos en los siguientes capítulos, está condicionada por la generación mutua de imágenes. La mala imagen de México es un pasivo que condiciona su capacidad de influir y negociar y, por eso, debe ser una prioridad revertir esa situación.